# MEMORANDO

PARA: **LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO**

Secretaria General

# DE: H.C. DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA

**H.C. ANDRÉS BARRIOS BERNAL**

ASUNTO: Presentación Proyecto de Acuerdo Estimada Secretaria

Teniendo en cuenta el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá y para efectos de llevar a cabo las competencias que el mismo otorga, presentamos ante usted el siguiente Proyecto de Acuerdo **“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”**

Agradeciendo de antemano su atención,

**ANDRÉS BARRIOS BERNAL**

Concejal de Bogotá

**DAVID HERNANDO SAAVEDRA**

Concejal de Bogotá

**PROYECTO DE ACUERDO No. 110 DE 2025**

**“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”**

# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. **OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto establecer medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben exigir las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.

La iniciativa tiene como finalidad crear y fortalecer una cultura de prevención del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), que les permita a los beneficiarios desarrollar mecanismos mínimos para gestionar estos riesgos y proteger su actividad económica de acciones ilegales en las que los puedan involucrar delincuentes organizados o no. Así mismo, impedir la instrumentalización de las entidades pertenecientes al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo en la canalización de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes, recursos mal habidos o la entrega de recursos para ser usados con fines terroristas.

# SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

**Convención de Viena de 1988: Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 de 1993 – Sentencia C-176 de 1994).**

Firmada en 1988 por 169 países. Trata principalmente sobre las medidas para combatir el tráfico ilícito de narcóticos y los problemas conexos de la aplicación de la ley. Aunque no utiliza el término lavado de activos, la Convención define el concepto y apela a los países para que tipifiquen esta actividad. Sin embargo, la Convención de Viena se limita al narcotráfico como delito subyacente y no aborda los aspectos preventivos del lavado de activos. La Convención entró en vigor en noviembre de 1990.

**Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 (Aprobado por la Ley 808 de 2003 – Sentencia C-037 de 2004).**

Esta convención exige a los Estados que la han ratificado que tipifiquen como delito el terrorismo y los actos terroristas. Bajo esta convención, es ilegal que cualquier persona proporcione o recaude fondos con (i) la intención de que estos fondos se usen para, o (ii) el conocimiento de que estos fondos se usarán para, llevar a cabo cualquiera de los actos de terrorismo definidos en las otras convenciones específicas que se anexan a esta convención.

*“(…)*

* 1. *Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa”.*

**Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 – Sentencia C-962 de 2003).**

La Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) fue firmada en el año 2000 con el propósito de ampliar los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada internacional. Con respecto al lavado de activos, la Convención obliga específicamente a cada país que la ratifica, entre otras cosas, a:

*“tipificar el lavado de activos y considerar todos los delitos graves como delitos subyacentes al lavado de activos, tanto los cometidos dentro como fuera del país, y permitir que el conocimiento o la intención criminal que se requieren como elemento de un delito tipificado puedan inferirse de circunstancias objetivas”*. Así mismo, *“establecer regímenes fiscalizadores para impedir y detectar todas las formas de lavado de activos, que incluyan la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y el reporte de operaciones sospechosas”*

*(…)*

*ARTÍCULO 7. MEDIDAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO.*

1. *Cada Estado Parte:*
   1. *Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;*

**Convención de Mérida de 2003: Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (Aprobada por la Ley 970 de 2005 – Sentencia C – 172 de 2006).**

*(…)*

***Artículo 5º*** *Políticas y prácticas de prevención de la corrupción*

*1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.*

*(...)*

***Artículo 23****. Blanqueo del producto del delito 1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente (...):*

*(...)*

***Artículo 26.*** *Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, según sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participar en delitos tipificados según esta Convención (...).*

# CONSTITUCIÓN POLÍTICA

**Artículo 123.** Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

**Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

**Artículo 333.** La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

(…)

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

# NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

La gestión de los riesgos en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo aplicable a entidades públicas tiene bases en regulación que inicialmente fue concebida

para el sistema financiero (Decreto 663 de 1993, denominado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF) a través de la aplicación del *literal d) del numeral 2 del artículo*

*102* (modificado por el Artículo 1 de la Ley 1121 de 2006)[*1*](#_bookmark0)del esto es, reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, en razón a que fue a través del Decreto 1497 de 2002 (Reglamentario de la Ley 526 de 1999, que creó la UIAF) que se obligó a las entidades públicas diferentes al sector financiero a reportar operaciones.

En este mismo sentido, mediante la modificación al Numeral 1, del Artículo 3º, de la Ley 526 de 1999, *Funciones de la UIAF*, a través del Artículo 33 de la Ley 1762 de 2015, ***las entidades del Estado están obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la UIAF la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del EOSF***[2](#_bookmark1).

Así mismo, en aplicación del artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, se establece la obligación que, en procesos de contratación, las entidades del Estado deben identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades delictivas.

**LEY 526 DE 1999,** Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.

**Artículo 1o. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**. <Inciso 1o. modificado por el artículo [32](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html#32) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Créase la Unidad

1 Literal modificado por el artículo [1](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#1) de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación

2 “La Unidad tendrá́ como objetivos centrales los siguientes:

1.La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritaria mente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevantes para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente articulo. Así́ mismo, la Unidad podrá́ recibir información de personas naturales.

de Información y Análisis Financiero, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y las conductas relacionadas con la defraudación en materia aduanera.

(…)

**Artículo 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD.** <Artículo modificado por el artículo [33](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html#33) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad tendrá como objetivos centrales los siguientes:

(…)

1. La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritaria mente el lavado de activos y la financiación del terrorismo (…)

**Artículo 4o. FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL.** <Artículo modificado por el artículo [4](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html#4) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las siguientes serán las funciones generales de la Dirección General:

(…)

11. Participar en las modificaciones de normas jurídicas a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos, de la financiación de terrorismo, del contrabando y del fraude aduanero.

(…)

**Artículo 9o. MANEJO DE INFORMACION.** La Unidad creada en la presente ley

podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

**LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012**, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

**ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

(…)

* 1. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

**LEY 2195 DE 2022**, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Cuyo objetivo fue adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por el público.

(…)

**Artículo 9o.** Adiciónese el artículo [34-7](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#34-7) a la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo** [**34-7**](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#34-7)**. Programas de transparencia y ética empresarial.** Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia o control adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría.

(…)

**ARTÍCULO 12. PRINCIPIO DE DEBIDA DILIGENCIA.** La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es), teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios:

(…)

**PARÁGRAFO 2o.** La identificación plena de las personas naturales y personas jurídicas a las que hace referencia el artículo [27](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#27) de la Ley 1121 del 2006, se cumple con lo descrito en el presente artículo.

(…)

**ARTÍCULO 31.** Programas de transparencia y ética en el sector público. Modifíquese el artículo [73](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#73) de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo** [**73**](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#73)**.** Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

1. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público;
2. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las

listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;

1. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
2. Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo [76](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#76) de la Ley 1474 de 2011;
3. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
4. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

**PARÁGRAFO 1o.** En aquellas entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.

**Documento CONPES 4042 del 9 de agosto de 2021,** Política Nacional Anti Lavado De Activos, Contra La Financiación Del Terrorismo Y Contra La Financiación De La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva.

**Documento CONPES D.C. 01 del 6 de febrero de 2019,** Política Pública Distrital De Transparencia, Integridad Y No Tolerancia Con La Corrupción.

# COMPETENCIA DEL CONCEJO

**Decreto Ley 1421 de 1993**

***Artículo 8.*** *Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.*

***Artículo 12.*** *Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

* 1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (….*

# JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El lavado de activos es el proceso a través del cual se realiza la conversión o la transferencia de bienes o ganancias obtenidas de una actividad delictiva, encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos. Básicamente, el lavado de activos comprende las ganancias obtenidas de bienes de origen delictivo más que de los bienes mismos (Banco Mundial, 2007).

El financiamiento del terrorismo puede ser entendido como un apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales dependiendo de cada país. El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo general, presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el encubrimiento.

De acuerdo con esto, la comunidad internacional ha desarrollado herramientas vinculantes para combatir este flagelo proveniente del tráfico de drogas, delincuencia organizada transnacional y corrupción a través de las convenciones de Naciones Unidas como la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, por la intensificación en todo el mundo de los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones; Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional cuyo propósito es el de promover la cooperación para prevenirla y combatirla más eficazmente; y Convención de Mérida en 2003 contra la corrupción.

En observancia a estas acciones de la comunidad internacional los países que conformaban el G7 constituyeron en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como ente intergubernamental con el mandato de fijar estándares de prevención y combate del lavado de activos, expidiendo así recomendaciones como iniciativa para luchar contra los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de lavadores de dinero del tráfico ilícito de drogas.

En esta misma línea de prevención se crearon organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (anteriormente Gafisud), del cual Colombia hace parte desde el año 2000, escenario en el que se promueve de manera permanente el cumplimiento de las Convenciones Internacionales en materia de prevención y lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, así como el cumplimiento de las Recomendaciones de GAFI, dentro de las que se establece el deber de cooperación y

coordinación entre entidades a escala nacional permitiendo entablar entre sí el intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (GAFI, 2023).

Como desarrollo de lo anterior, Colombia en la vigencia 2022, promulgó la Ley 2195, por la cual se adoptaron medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y prevención del lavado de activos, y desde las cuales las entidades públicas del orden nacional y distrital deben enfocar esfuerzos para implementar las orientaciones definidas en la ley, enfocadas en mecanismos para prevenir y detectar la corrupción y el lavado de activos.

La política criminal en Colombia para combatir el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha orientado principalmente a la sanción penal o administrativa. No obstante, el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025 precisa que Colombia es un país vulnerable donde las acciones realizadas para mitigar las conductas de lavado de activos tienen muy bajo impacto. Por lo que se requiere fortalecer una política de prevención que no se limite al derecho penal, sino que debe orientarse ha cia mecanismos de cumplimiento normativo con instrumentos y mecanismos preventivos, que incluso involucren otras disciplinas (Lozano, 2023).

Dentro del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, estableció en el programa 3 de su primer objetivo “Bogotá avanza en seguridad” que la Administración Distrital implementará *acciones encaminadas a mitigar el mercado de estructuras criminales de hurto a celulares para el control del delito de receptación, incluyendo el énfasis de inteligencia y* ***persecución criminal en cuanto a las rentas criminales y el lavado de activos****, en coordinación con los organismos policiales, militares y judiciales dentro del marco de sus competencias.*

Igualmente, este Plan Distrital de Desarrollo establece en el **artículo 93** unos programas y estrategias para la entrega de apoyo financiero al tejido productivo en cabeza del sector Desarrollo Económico que pondrá en marcha el otorgamiento de créditos con tasa compensada, la operación de líneas de crédito, la asignación de recursos no reembolsables, y, en general, la implementación de otros mecanismos alternativos de financiamiento. Más adelante, el **artículo 96** propone un incentivo a la creación de empleo cuyos destinatarios serán empleadores de naturaleza privada que realicen la contratación laboral. Así mismo, el **artículo 115** crea el Fondo para el Desarrollo de los Micronegocios de Bogotá FONDEM, cuyos recursos asociados podrán ser administrados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través del esquema fiduciario.

Las estrategias antes descritas, incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, deben implementar medidas que eviten la instrumentalización de las entidades pertenecientes al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo para canalizar operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de sus bienes o recursos mal habidos y la recolección de recursos para ser usados con fines terroristas. Por lo que este proyecto está armonizado para ayudar en la implementación del Plan Distrital de Desarrollo vigente.

En relación con los ODS formulados desde Naciones Unidas y, de manera específica, frente al objetivo número 16 *Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas*, este proyecto al promover medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, aporta al cumplimiento de la meta: *“****16.4*** *De aquí a 2030, reducir significativamente* ***las corrientes financieras*** *y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y* ***luchar contra todas las formas de delincuencia organizada****”* (resaltado fuera del original).

Una primera versión de este proyecto de Acuerdo fue presentado en el periodo de sesiones del año 2024, en donde tuvo ponencia positiva con modificaciones de los honorables Concejales **ANDRÉS BARRIOS BERNAL** y **MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ.** Las

modificaciones de dicha ponencia, por su pertinencia, fueron incorporadas al articulado del proyecto de Acuerdo que aquí nuevamente se presenta.

# IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

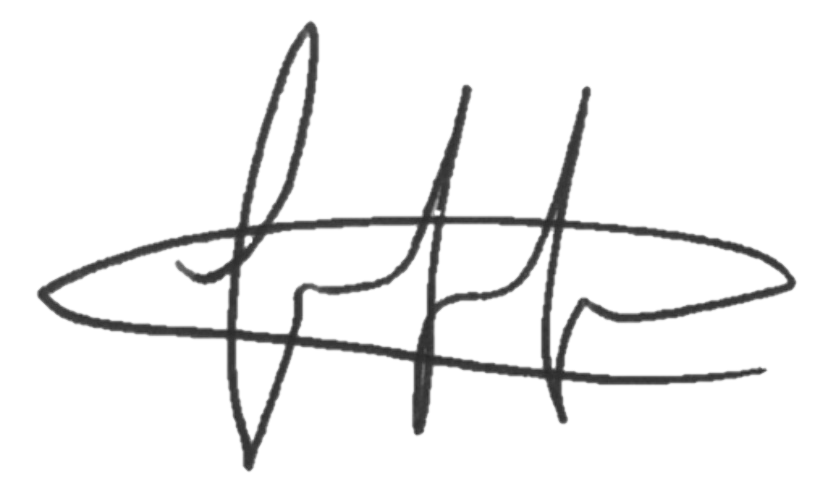
*En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.*

*(…) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.*

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

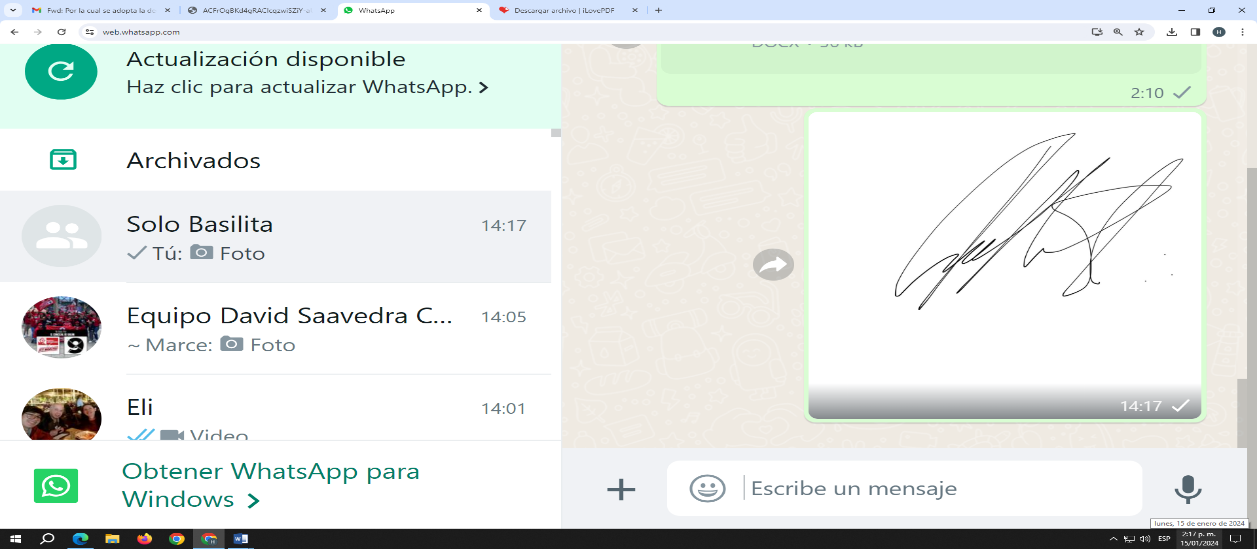
# CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

**ANDRÉS BARRIOS BERNAL**

Concejal de Bogotá



**DAVID HERNANDO SAAVEDRA**

Concejal de Bogotá

**PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2025**

**“Por medio del cual se establecen responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adopten medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito”**

# EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

# ACUERDA:

**ARTÍCULO 1. Objeto-** Establecer responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo implementen medidas de prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

**ARTÍCULO 2.-** Las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adoptarán medidas mínimas preventivas para la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) frente a las personas naturales y jurídicas que se les otorgue algún apoyo o subsidio económico por parte del Distrito.

**ARTÍCULO 3.-** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo expedirán en un término máximo de seis (6) meses un documento que contenga los lineamientos mínimos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para ser beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, y determinar su alcance. Los lineamientos mínimos deben contemplar y desarrollar entre otros los siguientes temas:

1. Mecanismos para identificar sus capacidades de los beneficiarios en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
2. Acciones específicas para fortalecer sus capacidades en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
3. Instrumentos de prevención y monitoreo de los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
4. Procesos pedagógicos y de sensibilización que contribuyan a fomentar la transparencia, integridad y ética empresarial.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo se encargarán de diseñar e implementar las acciones específicas para fortalecer sus capacidades institucionales en relación con la prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial, de conformidad con los estándares internacionales. Para ello, podrán solicitar el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Cámara de Comercio de Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o cualquier otra organización con experiencia en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y la prevención y lucha contra la Corrupción.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo considerarán como una señal de alerta la renuencia de las personas naturales y jurídicas a cumplir los lineamientos mínimos que establezcan. Por lo tanto, ante esta renuencia estas entidades enviarán el respectivo reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

**ARTÍCULO 4.-** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, incluirán dentro de sus medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.
2. Solicitar a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando

o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.

1. Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – información tendiente a determinar si la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, ha estado involucrada en aprehensiones por contrabando.

**PARÁGRAFO:** Las entidades Distritales que otorguen ayudas, subsidios o cualquier clase de apoyo económico serán las encargadas de obtener la autorización por parte de los beneficiarios de esos rubros para el tratamiento de datos personales que permitan solicitar la información determinada en este artículo.

**ARTÍCULO 5.-** La Administración Distrital iniciará un proceso de análisis, diseño y estructuración de capacitaciones y programas educativos sobre la prevención de riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo, así como el cumplimiento de los lineamientos que se expidan al respecto, dirigido a:

1. Funcionarios de las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
2. Personas naturales o jurídicas que acceden a ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.

**PARÁGRAFO:** La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluirá en los Talleres de Educación Financiera que hacen parte de la estrategia Academia Financiera, o aquel programa o estrategia que los reemplace, un componente sobre prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial.

**ARTÍCULO 6.-** La Administración Distrital deberá realizar, dentro del término de un año a partir de la vigencia de este Acuerdo, un informe donde se analice la viabilidad para crear un Comité Distrital de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que tenga como función hacer el seguimiento periódico y verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en este Acuerdo.

**ARTÍCULO 7.-** Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, podrán, en coordinación con las instancias distritales competentes, promover incentivos que fomenten el desarrollo e implementación de buenas prácticas frente a la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, y el fomento de la denuncia.

**ARTÍCULO 8.- CANAL DE DENUNCIA.** La Administración Distrital establecerá un protocolo para ser implementado en los canales de denuncias de las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. Este protocolo deberá precisar las responsabilidades de los funcionarios designados de atender las denuncias recibidas y el tratamiento que debe darse a la información recibida, asegurar el anonimato de los denunciantes si estos así lo solicitan y verificar una ruta de atención a los denunciantes para evitar represalias por parte de las personas denunciadas.

**ARTÍCULO 9.- TRANSICIÓN.** Las personas naturales y jurídicas que aspiren a recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, contarán con un término de seis (6) meses a partir de la expedición de los lineamientos mínimos de que trata el artículo segundo del presente Acuerdo para acreditar el cumplimiento de estos.

**ARTÍCULO 10.- VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

# PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

**BIBLIOGRAFIA**

Banco Mundial, 2007, “Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial IX”.

[https://documents1.worldbank.org/curated/en/832871468156887361/pdf/350520SPANISH](https://documents1.worldbank.org/curated/en/832871468156887361/pdf/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf) [0101Official0Use0Only1.pdf](https://documents1.worldbank.org/curated/en/832871468156887361/pdf/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf). , Bogotá: Banco Mundial

ONU, 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

GAFI, 2023, “Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra El Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo, y El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. [https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-](https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-metodologia-actdic2023/file) [virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-](https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-metodologia-actdic2023/file) [metodologia-actdic2023/file](https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-metodologia-actdic2023/file).

Lozano Maturana, G. (2023). ¿Hacia un modelo de (in)cumplimiento penal? Reflexiones a partir del delito de lavado de activos en Colombia. Universidad de los Andes. Disponible en: <http://hdl.handle.net/1992/6869>